

Empresarios de Los Camachos redoblan la presión para desatascar los suelos de la ZAL

La patronal del polígono asegura que hay inversores interesados en comprar terrenos del Estado en la zona norte y pide ayudas para ello

JESÚS NICOLÁS
Cartagena

Los empresarios intentan redoblar la presión para desbloquear la atascada Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en el polígono de Los Camachos. Con prácticamente la mitad del parque empresarial más grande en extensión de la Región paralizado, los únicos movimientos visibles han sido las sucesivas subastas de parcelas que, sin demasiado éxito, el Sepes (ahora bajo el nombre de Casa 47) ha ido convocando. La última de ellas se publicaba esta misma semana. 30 parcelas en las etapas I y II del sector sur de Los Camachos.

La Asociación de Empresarios de Los Camachos valoró positivamente la nueva subasta impulsada por el Gobierno de España. Ven su convocatoria como «un guiño» al tejido empresarial del polígono, aunque lamentan que los precios de salida de los solares no hayan variado respecto del anterior intento de Sepes el año pasado. De la última intentona, a fecha de noviembre del año pasado, solo 9 de las 43 parcelas que se sacaron a pública concurrencia habían encontrado un comprador.

Algo que, a juicio del presidente de los empresarios del polígono, Antonio Betancor, solo es sintomático de que los suelos que verdaderamente revisten interés entre las empresas son los que están en el sector norte, los de la ZAL. Betancor critica que apenas se han producido avances en este sentido. «La Comunidad dice que quiere comprar un millón de metros cuadrados, pero que el Gobierno no les recibe. Y el Gobierno dice que la Comunidad no tiene dinero para pagarlo», lamenta el dirigente empresarial.

Betancor agradeció que el Gobierno regional se haya prestado a agendar una reunión a la que espera que



Áreas pendientes de urbanizar y desarrollar en el polígono industrial de Los Camachos en una imagen de esta misma semana. ANTONIO GIL / AGM

acuda el presidente regional, Fernando López Miras, quien acudirá en compañía, dice, de la consejera de Empresa, Marisa López Aragón, y la alcaldesa, Noelia Arroyo. Un encuentro en el que precisamente Betancor busca compartir con la administración regional las principales preocupaciones que rondan la mente de los empresarios del polígono.

El portavoz de la patronal se ofrece asimismo a mediar para facilitar un encuentro en el que estén presentes tanto la administración regional como la nacional con el fin de desbloquear la venta de suelo en la ZAL. El representante empresarial insiste además en que hay in-

versores privados con interés en comprar esos terrenos, además de la propia Comunidad Autónoma. Pide además que se estudien ayudas para ellos, ya que los suelos están todavía pendientes de obras de urbanización y faltos de suministro eléctrico suficiente.

Asimismo, Betancor recuerda que, si bien la Comunidad carece de los terrenos para desarrollar la ZAL y la Ciudad del Transporte, tampoco la Autoridad Portuaria ha dado grandes pasos. «Ellos sí tienen suelo para ejecutar el traslado a Los Camachos del depósito franco desde Santa Lucía», afirma el representante de la patronal, que revalidó el cargo a fina-

les del año pasado. Ocasión en la que, cabe recordar, pidió la dimisión de la directora del Sepes, Leire Iglesias.

Desde el Gobierno regional, justifican a este diario el retraso en la compra de terrenos que quieren emprender en Los Camachos y dicen llevar más de un año manteniendo reuniones con Sepes para poder lle-

gar a un acuerdo. «A final de 2025, se llegó a un acuerdo de venta que no se pudo materializar porque desde Sepes se modificaron las condiciones de compra una vez acordadas», afirmaron portavoces de la Consejería de Empresa.

«Hay capacidad de compra»

Las mismas fuentes sostienen que el Ejecutivo autonómico «tiene capacidad de compra y el problema no radica en esto, sino en que Sepes ha cambiado en numerosas ocasiones las condiciones y, actualmente, se está a la espera de la contestación de Sepes para poder culminar el proceso».

El Ejecutivo autonómico justifica que no ha llegado a un acuerdo porque el Sepes cambió «en numerosas ocasiones» las condiciones

El Gobierno central acusa al regional de «bloquear» la transmisión de parcelas por su «endeudamiento»

J. N.
Cartagena

Desde la Delegación del Gobierno niegan la mayor. Portavoces del departamento que dirige Francisco Lucas culpan a la Comunidad Autónoma de «bloquear» cualquier posibilidad de desarrollo de la ZAL de Cartagena por no querer formalizar la compra de los

terrenos en cuestión «en las mismas condiciones pactadas en el convenio firmado con Sepes en 2018».

Manifiestan desde el Gobierno central que, dichas condiciones, fueron incluso mejoradas, dando la opción de aplazar el pago. «Esa transmisión de los terrenos pudo haberse realizado hace más de 5 años, bajo los términos de dicho conve-

nio, pero fue el Gobierno regional, el mismo que hay ahora, el que decidió de forma unilateral salirse del acuerdo consensuado».

Como prueba de la disposición de Casa 47, las mismas fuentes manifiestan que ya se acordó una transmisión de terrenos «con las mismas condiciones de precio que ahora se plantean» efectuada a favor de la Autori-

dad Portuaria. Conceden en este sentido que el Puerto «ha facilitado la ejecución de la primera fase de la ZAL, permitiendo la instalación del Centro Integral de Transporte, el Depósito Franco, además de promover suelo logístico para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios del puerto».

Manifiestan que, en 2024, retomaron las conversaciones con la Comunidad Autónoma. «Desde Casa 47, se les han hecho múltiples ofertas para formalizar la adquisición de esta actuación y su destino al desarrollo empresarial, sin que por parte del Ejecutivo autonómico se haya acepta-

do ninguna como consecuencia de su endeudamiento. Casa 47 está a la espera de que acepten sentarse de nuevo, cuándo y dónde quieran, para culminar una operación que no se ha materializado por decisión exclusiva del Gobierno regional».

Este periódico también se dirigió directamente al antiguo Sepes. Al igual que la Delegación del Gobierno, desmintieron al Gobierno regional. «Las condiciones de venta son públicas y las que se han adecuado al Gobierno de la Región de Murcia han permanecido intactas. El Gobierno de España está dispuesto a hacer